



**JUZGADO DÉCIMO (10º) ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Ref. Proceso	110013335010-2021-00186-00
Medio de control	EJECUTIVO
Ejecutante	AQUILINO PRIETO HERNANDEZ ¹
Ejecutado	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL -CASUR

Procede el despacho a estudiar si en el presente medio de control ha operado la caducidad, previo los siguientes antecedentes.

I. ANTECEDENTES

El señor Aquilino Prieto Hernández, presentó demanda ejecutiva en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, con fundamento en la en la sentencia del 28 de noviembre de 2011, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado 11001-33-31-010-2010-00093-00, que declaro la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 5387/OAJ del 3 de agosto de 2009 y como consecuencia ordenó el reajuste de la asignación de retiro del ejecutante para los año 1997,1999, 2000, 2002, 2003 y 2004, aplicando el incremento del índice de precios al consumidor.

Una vez reciba la demanda y por auto del 23 de julio de 2022, este despacho ordenó a la secretaria desarchivar el proceso ordinario, y se requirió a la entidad ejecutada con el objeto de que se informará el cumplimiento del fallo solicitado adjuntando los siguiente documentación: i) copia de los actos administrativos que dieron cumplimiento a la mencionada providencia, ii) copia de las constancias de pago especificando claramente la fecha en la que fue efectuado, y iii) copia de la liquidación realizada por la entidad ejecutada, debidamente detallada y con los soportes correspondientes.

Mediante correo electrónico del 26 de junio de 2022, la ejecutada allegó la documentación solicitada, en el mismo escrito indicó que mediante Resolución No. 11438 de 18 de septiembre de 2012 la entidad dio cumplimiento a la sentencia y el valor reconocido fue cancelado en la nomina del mes de noviembre de 2012, siendo pagada directamente al titular de la prestación. De otra parte, realizó un estudio jurídico para concluir que la presente acción se encuentra caducada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. De la caducidad en la acción ejecutiva

El fenómeno jurídico de la caducidad es el plazo objetivo para el ejercicio oportuno del derecho de acción, se encuentra regulada en las normas procedimentales como

¹ Correo notificación ejecutante: juriaccion@gmail.com

una carga procesal, es decir, es el plazo perentorio para comenzar el proceso y cuyo incumplimiento la ley presume la falta de interés del demandante en impetrar el derecho de acción.

Respecto de la figura procesal antes indicada, se debe recordar que está opera *ipso iure* o de pleno derecho, esto es, no admite renuncia y el operador judicial debe declararla, en el evento en que se verifique la conducta sancionable por la ley esto es el llamado procesal a interponer la acción judicial correspondiente dentro de los plazos legalmente establecidos.

Con relación al proceso ejecutivo y como es sabido el C.P.A.C.A., no contempla un procedimiento especial para efectos del trámite que se debe impartir a esta acción. Por ello, en virtud de lo contemplado en los artículos 297, 298, 299 y 308 ídem, para los aspectos no regulados, debe acudir al Código General del Proceso.

Así las cosas, al no haber disposición expresa en el C.P.A.C.A., en relación con el trámite procesal que debe surtir, se aplicara al mismo las normas contenidas en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso.

En relación con los documentos que constituyen título ejecutivo en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme al numeral 1º del artículo 297 del C.P.A.C.A., lo son las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

Por otra parte, para que un documento se considere título ejecutivo debe reunir condiciones especiales que lo identifiquen de otro documento, las cuales están previstas en el artículo 422 del C.G.P., contemplando que estos deben contar con la existencia de la obligación, ser auténticos y emanar del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva, de conformidad con las leyes.

Precisando lo anterior, es de vital importancia, determinar las normas sustanciales y procedimentales aplicables a la presente demanda ejecutiva, ello en razón a que la sentencia que conforma el título ejecutivo fue proferida y adquirieron firmeza en vigencia del Código Contencioso Administrativo, sin embargo, la presente acción fue iniciada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contenciosos Administrativo.

Como fue indicado en precedencia la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá con fecha 28 de noviembre de 2011, dispuso en su numeral séptimo que la entidad debía dar cumplimiento conforme a lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. Este último artículo consagraba la oportunidad para exigir el cumplimiento de la sentencia, así:

“Artículo 177. Efectividad de condenas contras entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial, o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien se competente para ejercer las funciones del Ministerio Público frente a la entidad condenada.

El agente del Ministerio Público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuesto básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.

El Congreso, las asambleas, los concejos, el Contralor General de la República, los contralores departamentales, municipales y distritales, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones

suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. **Tales condenas, además, serán ejecutables ante la jurisdicción ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria (...)** (Se resaltó).

Vista la regulación legal relacionada con la oportunidad para presentar la demanda ejecutiva, se considera del caso citar decisiones del Consejo de Estado referidas al punto de la caducidad que se estudia en el presente caso. El Consejo de Estado², Sección Tercera, sobre la caducidad de la acción ejecutiva contractual, dijo:

“...Teniendo en cuenta que, antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998 no existía una disposición legal en materia de caducidad de los procesos ejecutivos contractuales, el Consejo de Estado aplicaba lo dispuesto en el artículo 2.536 del Código Civil, esto es, el término de prescripción de 10 años para dicha acción. Luego a partir del 8 de julio de 1998, la Sala (auto del 12 de noviembre de 1998, exp. 15.299) interpretó el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del C.C.A., y previó el término de caducidad de 5 años para las acciones ejecutivas derivadas de providencias judiciales. Así, con fundamento en la figura de la analogía consagrada en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, esta Corporación aplicó que a pesar de que la Ley 446 de 1998 no señaló el término de caducidad respecto de los procesos ejecutivos contractuales, lo cierto es que como el artículo 44 ibídem previó el término de 5 años para las acciones ejecutivas derivadas de providencias judiciales, dicha disposición resulta aplicable a los títulos ejecutivos contractuales. Cabe precisar que, en los casos en los cuales el título ejecutivo hubiere nacido a la vida jurídica antes del 8 de julio de 1998, resultará aplicable el término de prescripción de 10 años previsto en el artículo 2.536 del C.C., sin reforma; y aquellos que se originaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, tendrán un término de caducidad de 5 años. En cualquier caso, el término se cuenta a partir del momento en el cual la obligación sea exigible...”.

En una decisión judicial posterior, esta vez emanada de la Sección Segunda de la misma Corporación³, en lo relacionado con la caducidad que se estudia, señaló:

“(...) Los términos para interponer la acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales se encuentra claramente establecida por 177 del C.C.A., señala que “Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria de su ejecutoria”. Por su parte, el numeral 11 del artículo 136 ibídem, establece que: “11. La acción ejecutiva derivada de esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad prevista por la respectiva decisión judicial”. De la normatividad señalada, se concluye que en caso bajo examen ha tenido acción, si se tiene en cuenta que la sentencia de 10 de abril de 1996 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, cuaderno 1 del expediente, quedó ejecutoriada el 22 de abril de 1996, es decir, que al tenor del artículo 177 del C.C. después de su ejecutoria, el 22 de octubre de 1997, fecha a partir de la cual la accionante contaba con un lapso de 5 años (artículo 136 ibídem), esto es, hasta el 22 de octubre de 2002, cosa que no sucedió, pues la demanda sólo vino a interponerse cuando habían transcurrido más de cuatro (4) años después de vencido el término establecido para instaurar la acción ejecutiva, de la relación fáctica del expediente, tal como pasa a ilustrarse (...)” (Se subrayó).

Estos dos pronunciamientos son unánimes en señalar que el término para presentar la demanda ejecutiva caduca al vencimiento de los cinco (5) años contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible, y que no existe otra oportunidad legal que permita presentarse por fuera de ese término.

² Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. Consejero Ponente (e): MAURICIO FAJARDO GOMEZ. Sentencia de 26 de mayo de 2010, Actor: Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial – CODETER. Demandado: Departamento de Cundinamarca. Expediente No. 25000-23-26-000-1998-02996-01 (25803).

³ Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección “A”, consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente No. 25000232500020070052801 192607. Auto. 27 de mayo de 2010. Actor: Olga Molina de Paz. Demandado: Departamento de Cundinamarca. Acción Ejecutiva Rechazo.

2.2. Caso en concreto

La sentencia que conforma el título ejecutivo en el presente proceso, fue proferida el día 28 de noviembre de 2011 por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado 11001-33-31-010-2010-00093-00, providencia que conforme a la constancia secretaria, quedó ejecutoriada el 12 de enero de 2012⁴.

Como ha sido enunciado por este Juzgado, la sentencia base del título ejecutivo cobró ejecutoria en vigencia del Código Contencioso Administrativo, por tanto, su exigibilidad se presentó una vez transcurrido los 18 meses de que trata el artículo 177 del referido estatuto, luego los 5 años de que trata el artículo 164 del C.P.A.C.A., debe contarse a partir del vencimiento de este último plazo.

Así las cosas, la sentencia objeto de ejecución cobró ejecutoria el 12 de enero de 2012, por lo tanto, el término de los cinco (5) años debe contabilizarse a partir del 13 de julio de 2013, (fecha en que vencieron los 18 meses), teniendo la parte hasta el 13 de julio de 2018 para presentar la demanda. No obstante, **la demanda fue presentada el día 2 de julio de 2021**⁵, con la presentación del escrito de ejecución. Por lo tanto, se concluye que la presente demanda fue presentada de manera extemporánea.

Por lo expuesto en esta providencia, se concluye que la acción ejecutiva derivada de decisión judicial proferida por esta jurisdicción cuenta con un término específico de caducidad de 5 años los cuales deben ser contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho tal como fue realizado en el párrafo anterior, lo que atañe a determinar que la presente acción esta caducada.

Por lo expuesto, el **Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C.**

RESUELVE

PRIMERO. - Rechazar el presente medio de control ejecutivo instaurado por el señor AQUILINO PRIETO HERNANDEZ en contra de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL -CASUR, por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

SEGUNDO. - En consecuencia, una vez en firme esta providencia, **archívese** el expediente previa las anotaciones en el sistema.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

Wp

⁴ Expediente Digital- archivo 007.REPUESTA REQUERIMEINTO.PDF., Documento 24

⁵ Expediente Digital- archivo 002. RADICADO MEMORIAL.PDF.,

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **08f23bc35123d2f7f5b270378f4a07a8f9c588840cbacc73c6cc644c4df57210**

Documento generado en 24/11/2022 11:40:38 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>